

Santiago, once de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO;

PRIMERO; Que comparece doña Ximena Basualto Acuña, abogada, en representación convencional de Constructora, Tronaduras y Comercial Kaap Ltda., interponiendo reclamo en contra la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, RUT 61.702.00-9, representada legalmente por don Alfonso Domeyko Letelier, respeto de multa impuesta en resolución N° 2364, de fecha 27 de diciembre de 2021. Señala que en Marzo de 2021 se inició procedimiento administrativo en contra de la demandada, que es titular de la faena denominada Mina Santa Ana, ubicada en la comuna de Curanilahue, provincia de Arauco, Región del Bio-Bio, que se dispuso el cierre temporal y parcial de los lugares de trabajo, siendo condicionado el alzamiento de la medida a la presentación de un nuevo proyecto que considerase un sistema de ventilación de manto alto, con la habilitación de salidas de emergencia y labores generales del circuito de la mina, que igualmente se formularon cargos por incumplir el proyecto de aprobado por la resolución exenta N° 01/2011, en que la empresa tiene autorizadas la explotación por un sistema de extracción por frente denominado Short Wall, en circunstancias que se estaría ejecutando la explotación con una galería maestra siendo principal y revuelta a la vez, en forma ciega y sin conexión a una galería por donde salgan los gases nitrosos y posible vía de emergencia ante cualquier evento, imponiéndose una sanción por este hecho, lo que es un error, toda vez que el método de explotación fue modificado, por resolución número 3 de 2012, además el acceso estaba bloqueado encontrándose la actividad del manto alto paralizada al momento en que se hizo la fiscalización por el propio servicio. Luego, en cuanto al segundo hecho sancionado, esto fue porque la empresa no contaría con asesoría prestada al menos una vez cada seis meses por experto en prevención de riesgos tipo C, lo que igualmente considera erróneo, toda vez que si bien la demandante no contaba con experto categoría C, si mantenía un experto ingeniero geomensor, quien ha trabajado por años en la faena, tiene basta experiencia en operaciones mineras en la provincia de Arauco, habiendo sido aprobado esto por la misma reclamada, de la misma forma, la empresa tenía una prevencionista de riesgo que mantenía comunicación directa con la reclamada, estando ambos profesionales presentes en la fiscalización de Agosto de 2020, sin que el tema de la presencia del profesional hubiera sido mencionada como medida correctiva. Pide en definitiva que sean dejadas sin efecto las multas aplicadas o en subsidio sean ellas rebajadas conforme al mérito que estime el Tribunal.



SEGUNDO; Que la demandada contesta la demanda, solicitando el rechazo de la misma en base a las siguientes consideraciones. Que fue aprobada la faena minera en cuestión mediante el sistema denominado Frente Short Wall, que implica la existencia de dos galerías, un chiflón principal, para la entrega de aire fresco, acceso de personal, extracción de estéril y/o carbón, desagües y energía eléctrica, y un chiflón de revuelta, para la extracción de aire viciado y salida de emergencia, que con en el año 2012, mediante resolución N° 3 se modificó el método de explotación, manteniéndose el sistema frente Short Wall, pero se agregó mecanización de los frentes de arranque, incorporando transportadoras de cadena tipo Panzer. En cuanto a los argumentos de la demanda respecto de las multas impuestas, que efectivamente lo fueron por los hechos que se señalan en la demanda, señala que no fueron expuestos en el procedimiento administrativo como descargos, que en el procedimiento se ha acreditado que la demandante no cumplió con las condiciones establecidas ni en la resolución N° 001/2011 ni en la resolución N° 3 de 2012, ya que conforme a ellas siempre se requería la existencia del chiflón principal y el de revuelta y la demandada usaba solo un chiflón que servía las dos funciones, lo que es un incumplimiento a las dos resoluciones que aprobaron la faena. En cuanto al segundo hecho, señala que es efectivo que la demandante no tenía profesionales expertos en prevención de riesgo tipo C, que es lo exigido por la norma, lo que se desprende de la misma demanda, que la persona que se señala no tenía las características necesarias para cumplir con el perfil en cuestión, por lo que no resulta precedente dejar sin efecto esta multa tampoco.

TERCERO; Que en audiencia preparatoria de fecha 26 de abril de 2022 se hizo el correspondiente llamado a conciliación, la que no se produce dada la naturaleza de la acción impetrada, fijándose como controvertido el siguiente hecho;

1.- Hechos y circunstancias relacionadas con las circunstancias que dieron lugar a la multa de autos.

CUARTO; Que en audiencia de juicio fueron incorporados los siguientes medios de prueba por la parte demandante:

DOCUMENTAL

1.- Resolución Exenta N°2364, de fecha 27 de diciembre de 2021, que sanciona a la reclamante.



2.- Resolución Exenta N°003 del año 2012, que aprueba modificación al método de explotación.

3.- Manifold N°014/2020.Copia Fiscalización de fecha 18 de agosto 2020.

4.- Manifold N°014/2020.Copia Fiscalización de fecha 25 de noviembre 2020.

5.- Comprobante seguimiento de Correos de Chile N°1178698685898, consta haberse efectuado la notificación de la Res. Exenta 2364/2021, con fecha 6/1/2022.

6.- Resolución Exenta N°001 de 15 de febrero de 2011, que aprueba el proyecto de explotación mineral de carbón Mina Santa Ana de la empresa SW Curanilahue S.A, ubicado en el sector la Chulita de la comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco.

7.- Copia Fiscalización de fecha 25 de noviembre 2020.

8.- Evidencia fotográfica Manifold N°014/2020.Copia Fiscalización de fecha 25 de noviembre de 2020, que da cuenta que el sector manto alto se encuentra sin trabajos, es decir, sin actividades extractivas.

9.- Copia e-mail enviado a la oficina de partes del Servicio Nacional de Geología y Minería Dirección Regional Zona Sur, en que se ingresa: - Plan de explotación y cierre Mina Santa Ana 2022. - Proyecto de ventilación Mina Santa Ana 2022. - Proyecto de explotación Mina Santa Ana 2022. - Localización del panel de explotación Mina Santa Ana 2022, dando cumplimiento a la medida correctiva decretada en base a resolución Exenta N°001/2011.

TESTIMONIAL

Declararon como testigos de la parte demandante las siguientes personas luego de haber sido legalmente juramentadas:

1.- Don Pablo Escobar Escobar.

2.- Don Nelson Garcés Arratia.

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

Fueron exhibidos por la parte demandada, a petición de la parte demandante los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta N° 922, de 27 de julio de 1999, aprueba Reglamento que fija normas sobre formación, designación y calificación de Expertos en Prevención de Riesgos de la Industria Extractiva Minera y Monitores de Seguridad Minera.



2.- Resolución Exenta N° 563, de 23 de marzo de 2001, que modifica letras g), i),k) del artículo 2°, del Reglamento que fija normas sobre formación, designación y calificación de Expertos en Prevención de Riesgos de la Industria Extractiva Minera y Monitores de Seguridad Minera, aprobado por Resolución N° 922 de 27 de julio de 1999.

3.- Resolución Exenta N° 661, de 8 de abril de 2020, modifica Resolución N° 922, de 27 de julio de 1999, del Sernageomin, que aprueba Reglamento que fija normas sobre formación, designación y calificación de Expertos en Prevención de Riesgos de la Industria Extractiva Minera y Monitores de Seguridad Minera, y fija su texto refundido, coordinado y sistematizado.

4.- Resolución Exenta N° 2394, de 29 de diciembre de 2021, Aprueba nuevo reglamento que fija normas sobre postulación, formación, designación, calificación, autorización e expertos y monitores en prevención de riesgos de la industria extractiva minera del Servicio nacional de Geología y Minería y su renovación, y deja sin efecto resolución N° 922, de 27 de julio de 1999, y sus modificaciones posteriores.

5.- Listado de expertos y expertas categoría C Sernageomin.

No se exhibe informe de desempeño del señor Jaime Mercado, por no existir documentos de ese tipo en poder de la demandada, lo que se tiene presente sin hacer efectivo apercibimiento.

QUINTO; Que por su parte la demandada incorporó los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL

1.- Resolución Exenta N° 01 de 13.02.11. Aprueba Proyecto de Explotación Mineral de Carbón y Plan de Cierre Mina Santa.

2.- Resolución Exenta N° 003 de 24.02.12. Aprueba Proyecto “Modificación al Método Explotación Mineral de Carbón Mina Santa Ana”.

3.- Resolución Exenta N° 038 de 18.06.18. Aprueba Cambio de Titularidad de los Proyectos que se Indican de Mina Santa Ana.

4.- Resolución Exenta N° 016, de 04.03.20. Aprueba Cambio de Titularidad de los Proyectos que se indican relacionados con Mina Santa Ana.

5.- Acta de Fiscalización realizada a la Mina Santa Ana, con fecha 25.11.20.

6.- Resolución Exenta N° 512 de 30.03-21. Inicia Procedimiento y Formula Cargos a Empresa Constructora Tronaduras y Comercial KAAP Limitada.



7.- Escrito de Descargos acompañados por la Empresa Constructora Tronaduras y Comercial KAAP Limitada, en contra de Resolución Exenta N° 0512.

8.- Resolución Exenta Ex N° 2364 de 27.12.21. Resuelve procedimiento sancionatorio iniciado contra empresa Constructora Tronaduras y Comercial KAAP Limitada.

TESTIMONIAL

Declaró como testigo de la parte demandada don Eduardo Arias Orellana, luego de haber sido legalmente juramentado.

SEXTO; Que en cuanto a la primera de las multas impuestas, esta se impone conforme a la resolución recurrida por incumplir la demandada con el proyecto de explotación autorizado en resolución N° 01/2011, en que se autoriza la explotación mediante el sistema denominado short Wall, en circunstancias que la demandada estaba haciendo la explotación por medio de un sistema a de galería de tipo maestra, la que sería principal y revuelta a la vez. Lo anterior significa que la demandante debía ejecutar la faena por medio de un sistema en que tuviera dos galerías, una principal, para la entrada de aire fresco y una de revuelta, que permitiera la salida del aire viciado y también sirviera como salida de emergencia. Sobre esto, el Tribunal estima que la prueba del proceso es suficiente para tener por acreditado el hecho que da lugar a la multa, en cuanto a que los antecedentes que fueron allegado al proceso, incluyendo los informes de la fiscalización misma, dan cuenta del hecho, el que en rigor no es negado por la empresa en su escrito de reclamación, la que más bien centra su defensa en el hecho de que la faena de la demandada no se regía por la resolución 001 de 2011, sino que por la resolución 003 de 2012, agregándose en la audiencia de juicio, con ocasión de la incorporación de la prueba un segundo argumento, consistente que la demandada no estaba operando el sector en que se encontró la falencia, el manto alto, estaba paralizado por una orden demandada en un juicio civil, este argumento no está en la demanda, la que solo hace referencia a una paralización provisoria que fue ordenada por la misma reclamada en el procedimiento de fiscalización, pero en ninguno de los casos se niega que la faena haya estado operando con solo una galería que era principal y de revuelta al mismo tiempo, cuestión que es ratificada por el testigo de la parte demandada, por tanto el hecho existe, así da cuenta el expediente administrativo del procedimiento sancionatorio y la prueba del proceso. De la misma forma, como se explicará a continuación, el hecho es una infracción al proyecto de explotación aprobado y por ello una infracción que debe ser sancionada.



SÉPTIMO; Que en cuanto a los argumentos de la demandada y la naturaleza de infracción que tiene el primer hecho, cabe señalar que el proyecto de explotación de la faena de la reclamante está aprobada por la resolución N° 1 de 2011, siendo cierto que en dicha resolución se establece con claridad la existencia de dos chiflones, uno principal para entrada de aire fresco, ingreso de personal, extracción de estéril o de carbón, desagües y energía eléctrica y un de revuelta, para extracción de aire viciado y salida de emergencia. Luego la resolución N° 3 de 2012 aprueba una modificación al proyecto de explotación, consignando de la igual forma que la Resolución N° 1, que se modifica, la presencia de dos chiflones, con los mismos fines. Por tanto, la demandante tenía autorizado una forma de explotación por medio de la Resolución N° 1 de 2011, que luego fue modificada por la resolución n° 3 de 2012, pero siempre el requisito de tener dos galerías era el mismo, de manera tal que el incumplimiento existe independientemente de la resolución a la que se haga referencia, considerando que en cualquier caso la resolución de 2012 solo es una modificación de la resolución de 2011, manteniéndose siempre el punto en debate en la causa de la misma forma y con la misma obligación para la demandante, de manera tal que el hecho sigue siendo siempre una infracción. Por su parte, el que la empresa haya debido paralizar la faena por una orden judicial es irrelevante en el caso, en primer lugar porque es un hecho probado por los mismo testigos de la demandada que la empresa sí estuvo operando en el sector del manto alto con un sistema de solo una galería hasta que dicha orden judicial fue emanada en Agosto o Septiembre de 2020, por lo que la paralización de la faena nada tenía que ver con asegurar el cumplimiento de las normas y de la autorización de explotación, sino que era una circunstancia totalmente externa, que corresponde a una tema netamente comercial que se ventila ante el juzgado civil y que determinó la paralización como media cautelar en ese contexto, por lo que para efectos de la paralización las condiciones de explotación no tenían ninguna relevancia ni pudieron haber sido consideradas por el Tribunal que decreto la paralización, toda vez que este solo estaba atendiendo a cuestiones relacionadas con un juicio puramente comercial. Por tanto, si es que la obra estaba detenida fue por una circunstancia no relacionada con la parte operativa de la empresa, pero la operación siempre estuvo funcionando fuera de norma y eso es lo que se constató durante el procedimiento de fiscalización, lo que constituye una infracción y fue correctamente sancionado por la autoridad, sin perjuicio de que además estos antecedentes no fueron vertidos tampoco en los descargos de la empresa y de hecho ni siquiera formaron parte completa de la demanda de autos, como se ha explicado, en razón de lo cual el Tribunal estima que no hay ilegalidad en esta sanción.



OCTAVO; Que en cuanto a la segunda de las multas, el hecho es por no contar la demandada con un la asesoría cada 6 meses al menos de un experto en prevención de riesgo de tipo C, el hecho es aceptado expresamente en la demanda, se señala como parte de la fundamentación que en la faena no existía un experto de este tipo, argumentándose que de cualquier forma había una persona que tenía vasta experiencia en el rubro del carbón. Esta defensa no puede prosperar porque lo exigido a la empresa es que tuviera un profesional con determinadas características, ni siquiera contratado permanentemente en la obra, sino que solo una asesoría que se podía dar cada 6 meses. De esta forma, en primer lugar, la dificultad para encontrar a un experto categoría C no es excusa para el incumplimiento, porque este es un requerimiento que tiene toda empresa que realice una faena de este tipo, por lo que son parte de los costos que debe asumir, si es que no está en condiciones de contratar a un profesional con las acreditaciones correspondientes entonces no está en condiciones de operar la faena que explota, porque esto no es más que uno de los requerimientos necesarios para funcionar, de la misma forma que una empresa no puede funcionar si es que no tiene como trasladar a su personal, o no tiene como proveerse de energía, no puede funcionar tampoco, conforme a la regla, si es que no tiene un profesional como el que se analiza en autos, por tanto, lo que se exige a la empresa es simplemente cumplir con todos los requisitos necesarios para trabajar y la contratación del profesional es uno de los costos en los que debe incurrir necesariamente y es su responsabilidad conseguir una persona, independientemente de la dificultad que ello represente. El hecho de que en la provincia de Arauca no residan profesionales categoría C y que su contratación sea muy costosa no es más que una de las condiciones propias del mercado en que participa la empresa, por lo que debe asumir el costo que el mercado le impone para producir sus productos, en este caso para dar cumplimiento a las normas relativas a prevención de riesgos, no pudiendo hacerse excepción respecto del cumplimiento de la ley para una empresa por el solo hecho de que la situación de mercado hace difícil el cumplimiento de las normas correspondientes, si no hay profesionales en la provincia entonces es la demandada la que debe tomar las medidas para proveerse de uno fuera de la provincia, considerando sobre todo que en caso alguno se está exigiendo la contratación a jornada completa, sino que solo una asesoría en semestral, lo que no parece una exigencia especialmente gravosa tratándose de un tema tan relevante como la prevención de riesgos dentro de una faena minera. Por su parte, que la demandada haya contado con otro profesional no obsta en ningún caso la imposición de la sanción, porque es incontrovertible que el profesional en cuestión no tenía la categoría C, por lo que no ha acreditado que cumple con los parámetros necesarios para acceder a la misma. La demandante no puede simplemente decidir que



WDXDXXZTWTX

no va a tener el profesional que le es exigido y que lo reemplazara con otro que tiene iguales o mayores conocimientos, porque la evaluación de las capacidades del profesional no le corresponden a ella, sino que a la autoridad, y la autoridad no ha acreditado a la persona que estaba contratada en la demandada, sin que tampoco el hecho de que esta persona haya estado presente en la fiscalización convalide el incumplimiento, porque el personal de la reclamada realiza su fiscalización con el personal que la empresa disponga, para luego evaluar si es que se cuenta con todos los profesionales exigidos normativamente, por lo que en caso alguno es señal de conformidad del órgano con una situación irregular el haber sido recibido por alguien que la empresa cree, fuera de todo marco legal, que suple al profesional que no tiene contratado como es debido.

Finalmente, y como argumento que no fue esgrimido por la demandante en su escrito de demanda, se alegó con ocasión de la rendición de la prueba y en las observaciones, que la demandada no tendría obligación de mantener una asesoría de experto categoría C porque tendría menos de 100 trabajadores, sin embargo, además de no haber sido alegado en su momento, ni en la instancia administrativa ni en la judicial, no es correcto, porque conforme al Art. 35 del Reglamento de Seguridad Minera, las empresas de más de cien trabajadores deben tener un departamento de prevención de riesgos que debe ser dirigido por un experto tipo A o B, que no es la situación que se le exige a la demandada, por lo que no es correcta la alegación.

En razón de lo anterior, sobre la segunda sanción tampoco se puede hacer lugar a la reclamación.

NOVENO; Que en cuanto a la solicitud de rebaja de la multa, en primer lugar es cierto que las multas ya fueron rebajadas en cuanto a su grado, como da cuenta la misma resolución que la impone, estimándose que son proporcionadas las sanciones atendida la gravedad de los incumplimientos, ya que la inexistencia de un chiflón de revuelta expone a situaciones de riesgo con la evacuación de los gases producidos y con la salida en caso de emergencia, que eran los objetivos de este segundo chiflón, en razón de lo cual la falta es grave y en esas condiciones operó la demandada hasta que un hecho no relacionado con el proceso productivo intervino, pero mientras operó la empresa no cumplió con la norma en un aspecto central en la seguridad de sus trabajadores. En cuanto a la segunda multa, la verdad es que el Tribunal estima que no se puede rebajar la multa cuando en el juicio se ha acreditado que no solo no se tenía un profesional categoría C al momento de la fiscalización, sino que la demandante tampoco lo consiguió después de ella, manteniéndose permanentemente en un incumplimiento que reconoce sin más y que solo excusa en una alegación que es del todo insostenible, a saber, que el cumplimiento de la



ley le resulta muy difícil. Por tanto, no se accederá tampoco a la solicitud subsidiaria de rebajar las multas.

DÉCIMO; Que habiendo sido valorada la prueba conforme a las normas de la sana crítica, se estima que no hay toros medios que permitan alterar las conclusiones a las que se ha arribado antes, considerando que las razones para rechazar las alegaciones de la demandante son más bien de tipo normativo.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 452, 453, 454, 456, 457, 458 y 459 del Código del Trabajo, y pertinentes del Reglamento de Seguridad Minera, se resuelve:

I.- Que se rechaza en todas sus partes la reclamación interpuesta por la empresa Constructora, Tronaduras y Comercial Kaap Ltda. en contra de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, ambas ya individualizadas, manteniéndose la resolución N° 2364 en los términos en que fue dictada por la reclamada.

II.- Que se condena en costas a la demandante, regulándose la personales en la suma de \$450.000.

RIT I-25-2022

RUC 22- 4-0380787-0

Dictada por don FRANCISCO VEAS VERA, Juez Suplente del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>